

15 de octubre, 2026

Fiscalía General de la República de El Salvador
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
Corte Suprema de Justicia
Miembros del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado

Presentes.

A las autoridades correspondientes del gobierno de El Salvador:

Como organizaciones de derechos humanos, religiosas y de solidaridad internacional de diversos países del mundo, nos dirigimos a ustedes para **expresar nuestra profunda preocupación sobre la criminalización y detención prolongada de decenas de personas de la comunidad “La Floresta”** quienes organizaban acciones legales para impugnar el desalojo injusto de más de 200 familias campesinas que habitaban el lugar desde hacía más de una década, **y de representantes de la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), organización que les acompañaba en su lucha, incluso su vocero, Fidel Antonio Zavala Perez.**

La solicitud de la Fiscalía por una tercera extensión al periodo de investigación otorgada el 11 de septiembre de 2026 por la Jueza Tres de San Salvador del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado es una táctica dilatoria que, de forma infundada y sin presentación de pruebas, retrasa el proceso legal hasta agosto del 2027. En relación a esta última prórroga, las organizaciones firmantes **denunciamos lo siguiente:**

- **que este grave retraso** 1) viola los derechos a un debido proceso, a la defensa, y a la seguridad jurídica e igualdad procesal y 2) fue facilitado por reformas al código penal dirigidas contra el crimen organizado que ahora se están aplicando a defensores de derechos humanos y a miembros de comunidades que se organizaban para defender sus viviendas;
- **la posibilidad de traslado de Fidel Zavala a algún centro penal** en el que su vida correría peligro en manos de directores y custodios que él previamente ha denunciado en base de la corrupción y torturas de las que fue testigo;
- **y el desconocimiento total de la condición de salud física y psicológica** de Fidel Zalava y los veintiún miembros de la comunidad La Floresta que guardan prisión preventiva en este caso.

En el caso del Sr. Zavala, una de las principales voces de personas ex-encarceladas que denunciaban los abusos cometidos por el régimen de Bukele dentro de las prisiones salvadoreñas, son importantes los siguientes factores:

- En 2022, el Sr. Zavala fue enviado a prisión preventiva bajo cargos de “estafa”, de lo que fue declarado inocente y liberado después de trece meses en detención provisional.
- El 17 de julio de 2024, Sr. Zavala, a través de UNIDEHC, fue la primera persona en interponer una denuncia formal en contra del Director General de Centros Penales, así como de los directores de los centros penales de La Esperanza (Mariona) y el centro penitenciario de Santa Ana. La denuncia, entregada a la oficina del Fiscal General de la República, detalla sus experiencias como testigo de abusos generalizados de los derechos humanos durante su encarcelamiento en dichas prisiones. Sr. Zavala también tuvo el valor de hacer públicas sus denuncias, saliendo en entrevistas y noticieros nacionales e internacionales atestiguando la corrupción, negligencia médica, abusos físicos, tortura y muertes a manos del Estado, y denunciando que también fue víctima de diversos abusos durante su detención. Esta labor lo convirtió en un rostro reconocido de la denuncia.
- El Fiscal General de la República de El Salvador, a finales del año 2024, reabrió el caso en el que el Sr. Zavala había sido declarado inocente de “estafa”, en un intento de silenciar su prominente voz de denuncia. En este primer juicio, a finales del 2025, se le dio un sobreseimiento definitivo y las acciones penales por esa acusación han sido extinguidas.

Mary Lawlor, durante su función como Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, se pronunció sobre el caso del Sr. Zavala, expresando su preocupación¹ sobre el grave riesgo que su encarcelamiento representa para su vida e integridad física, especialmente si se encuentra en manos de las autoridades de los mismos centros penales que acusó de abusos y tortura. En marzo de 2025, 171 organizaciones a nivel internacional respaldaron una petición de medidas cautelares para el Sr. Zavala a la CIDH². En junio de ese mismo año, la CIDH emitió un comunicado manifestando su preocupación por la detención del Sr. Zavala y las órdenes de arresto contra Ivania Cruz y Rudy Joya³.

En el caso de la comunidad “La Floresta” cuyos miembros fueron arrestados junto al Sr. Zavala en Febrero de 2025 y en el que se gira orden de captura en contra de dos representantes más de UNIDEHC, los abogados Ivania Cruz y Rudy Joya, es importante señalar que:

- La Fiscalía General de la República los acusó de delitos como asociación ilícita, usurpación de inmueble, amenazas agravadas y comercialización irregular de lotes, entre otros, cargos que han sido denunciados a nivel nacional e internacional como una caracterización errónea de la organización comunitaria para defender su derecho a la vivienda y a la propiedad. Al Sr. Zavala también se le acusa, falsamente, de simulación de la profesión, es decir acusándolo de hacerse pasar por abogado, por el hecho de ser vocero de UNIDEHC.
- El caso de “La Floresta” fue remitido a un tribunal especializado contra el crimen organizado, una jurisdicción diseñada originalmente para procesar estructuras criminales complejas como pandillas o redes de crimen organizado.
- **La aplicación de la acusación de agrupaciones ilícitas y de este tipo de tribunal a un conflicto relacionado con la organización comunitaria y la defensa de derechos y del territorio es preocupante,** ya que este tipo de jurisdicción implica mayores niveles de reserva en la información del proceso, limitaciones al acceso público a las actuaciones judiciales y condiciones procesales más restrictivas para la defensa.

Nos unimos también a las numerosas denuncias a nivel nacional e internacional sobre el carácter político del caso de comunidad “La Floresta”, afirmado por la decisión en marzo de 2026 por parte del gobierno de España de otorgar asilo político a Ivania Cruz y Rudy Joya, abogados de derechos humanos y representantes de UNIDEHC, que también están siendo criminalizados en el marco de este caso y se encuentran en el exilio en ese país - así como la decisión de INTERPOL de retirar la orden de arresto internacional que se había para Cruz y Joya, al determinar el carácter político del caso. Nos preocupa también que esta persecución política se haya extendido más allá de las fronteras de El Salvador - lo cual expertos de las Naciones Unidas calificaron como “acto de represión transnacional”⁴.

En su reporte “El precio de disentir”, la organización de derechos humanos Cristosal⁵ informó que el caso refleja un patrón de actuaciones institucionales que plantean serias preocupaciones jurídicas sobre el respeto a las garantías del debido proceso y la imparcialidad judicial, incluyendo la reapertura de procesos previamente archivados, la acumulación de nuevas imputaciones penales y diligencias como allanamientos y restricciones al acceso efectivo de la defensa.

A la luz de estos hechos, nos unimos a los movimientos sociales salvadoreño y grupos de la sociedad civil que exigen al Gobierno de El Salvador:

¹ Mary Lawlor via X, <https://x.com/MaryLawlorhrds/status/1908172575869710812>

² <https://x.com/Unidehc/status/1899463172966224021>

³ <https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2025/115.asp>

⁴ <https://www.oacnudh.org/expertos-de-la-onu-preocupados-por-la-instrumentalizacion-de-las-notificaciones-rojas-de-interpol-como-arma-contradefensores-de-derechos-humanos-de-el-salvador/>

⁵ <https://cristosal.org/wp-content/uploads/2026/03/Cristosal-El-precio-de-disentir-Criminalizacion-y-persecucion-politica-en-El-Salvador-2019-2025.pdf>

- Cierre el proceso penal contra los voceros de UNIDEHC Fidel Zavala, Ivania Cruz, Rudy Joya y los habitantes de la comunidad “La Floresta”;
- Facilitar la libertad inmediata de Fidel Zavala y los habitantes de “La Floresta”;
- Ponga fin a la criminalización de defensores de derechos humanos y de comunidades marginadas que se organizan para defender sus derechos.

Las organizaciones firmantes reiteramos nuestra solidaridad con Fidel Zavala, Ivania Cruz, Rudy Joya y los líderes o habitantes de la Comunidad “La Floresta”, que enfrentan persecución política y criminalización por el simple hecho de organizarse y defender sus derechos.

Atte:

América Latina

1. Comunidad Mapuche Elel Quimun, Argentina
2. Movimento pela Soberania Popular na Mineração, Brasil
3. Comisión Chilena de Derechos Humanos, Chile
4. Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, SOAW-Chile
5. CEDINS, Colombia
6. Congreso de los Pueblos, Colombia
7. Corporación Sembrar, Colombia
8. Equipo Jurídico Pueblos, Colombia
9. Red De Ddhh Del Campesinado Del Putumayo, Piamonte Cauca Y Cofania Jardines De Sucumbios - Ipiales Nariño, Colombia
10. Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo SJ" (CSMM), Ecuador
11. MOVIR, El Salvador
12. Movimiento de Solidaridad Social, El Salvador
13. Movimiento Unificado Francisco Sánchez 1932, MUFRAS-32, El Salvador
14. UNIDEHC, El Salvador
15. Asociación de Procuradores y Defensoras de los Derechos Humanos en Honduras APRODEH
16. Comité Francisco Morazán de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño, Honduras
17. COPINH, Honduras
18. Al Otro Lado, USA - Mexico
19. Comité de Solidaridad con El Salvador en México, México
20. MIRA Feminisms and Democracies, Mexico
21. Alianza Rural Comunitaria, Paraguay
22. Asociación Civil Latinoamericana de Migrantes en Venezuela, Venezuela

Australia

23. Robert Graham and The Landing, Australia
24. Sydney Peace & Justice Coalition, Australia

Canadá y Estados Unidos

25. CENTREX City Telecom, Canadá
26. Comité por los derechos humanos en América Latina, Canadá
27. El Independiente Canadian Newspaper, Canadá
28. Alma de Izote, EEUU
29. Alliance for Social and Economic Justice, San Francisco, EEUU
30. Anakbayan Montgomery County, Maryland, EEUU
31. Cambridge United for Justice with Peace, EEUU
32. Calan Institute for Transterritorial Justice (CATRA), EEUU/Honduras
33. Comité Por La Defensa De Los Derechos Humanos Y De La Tierra En El Salvador, Los Angeles, EEUU
34. CEIBA Collective, Chicago, EEUU

35. Centro Latino Cuscatlan, EEUU
36. Chicago Religious Leadership Network on Latin America, CRLN, EEUU
37. Colectiva La Chiltota, Washington, DC, EEUU
38. Colectivo RAIS Popular, Washington, DC, EEUU
39. Committee in Solidarity with the People of El Salvador, CISPES, EEUU
40. Denver Justice and Peace Committee, EEUU
41. Global Exchange, EEUU
42. Grupo Primero de Abril, EEUU
43. Guatemala Solidarity Project
44. Indivisible Santa Cruz Foreign Affairs Committee, Santa Cruz, EEUU
45. Institute for Policy Studies, Trade and Mining Program, EEUU
46. International League of Peoples Struggles, ILPS-USA
47. InterReligious Task Force on Central America, EEUU
48. Latin American Working Group, LAWG, EEUU
49. Los Siempre Sospechosos de Todo, Washington, DC, EEUU
50. Muslim Counterpublics Lab, EEUU
51. NACLA (North American Congress on Latin America), EEUU
52. National Lawyers Guild-Mesoamerica Working Group, EEUU
53. National Lawyers Guild Los Angeles Chapter, EEUU
54. Olympia Movement for Justice and Peace (OMJP), EEUU
55. Palestine Justice Coalition, Santa Cruz, EEUU
56. Portland Central America Solidarity Committee, PCASC, EEUU
57. Provincial Council Clerics of St. Viator, EEUU
58. Resistencia Comunitaria, Los Angeles, EEUU
59. Rochester Committee on Latin America, NY, EEUU
60. San Francisco Committee for Human Rights in the Philippines, EEUU
61. Sisters of Mercy of the Americas – Justice Team, EEUU
62. SOA Watch, EEUU
63. SOLACE, EEUU
64. Tanod Lupa, EEUU
65. TECUS Transborder Experiences of Central American University Students, EEUU
66. US Communities for Peace and Justice in the Americas, EEUU
67. Washington Office on Latin America (WOLA), EEUU
68. We are CASA, EEUU

Europa

69. Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia, Alemania
70. FLÜCHTLINGSHILFE MITTELAMERIKA e. V., Alemania
71. Informationsgruppe Lateinamerika – IGLA, Austria
72. Asociación trabajadores del estado, ATE, España
73. Comité Oscar Romero De Murcia, España
74. Comité Oscar Romero de Torrejón de Ardoz, España
75. Comité Oscar Romero de Vigo, España
76. Coordinadora Cántabra de ONGD, España
77. Comité de Solidaridad Monseñor Oscar Romero, España
78. Comitè de Solidaritat Óscar Romero de Tarragona i Reus, España
79. Comité Óscar Romero De Valladolid, España
80. Comité Oscar Romero de Vigo, España
81. Fundaión Mundubat, España
82. Kuska Sarea, España
83. Martín Etxea Elkartea, España

84. Paz Y Solidaridad Euskadi, España
85. SOLdePAZ.Pachakuti, Estado Español
86. Zehar-Errefuxiatuekin, España
87. Centro de investigación y elaboración para la democracia CRED, Italia
88. Comité Noruego de Solidaridad con América Latina, Noruega
89. Frente Intercontinental Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña, Noruega
90. Latinamerikagruppene i Oslo, Noruega
91. Latin-Amerikagruppene i Norge, Chilegruppa, Noruega
92. BACHUE ELKARTEA, País Vasco
93. Ipes Elkartea, País Vasco
94. Centrale Sanitaire Suisse, Suiza
95. Centrale sanitaire Suisse romande, Suiza
96. Medico International Schweiz, Suiza
97. RedSol - Red de Solidaridad con Centroamérica, Suiza
98. Secretariado de Centroamérica, Suiza

Regional y Global

99. Asociación Americana de Juristas, AAJ, Regional
100. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, Regional
101. Cristosal, Regional
102. Nación Salvadoreña en El Exterior, Global

– ENGLISH TRANSLATION BELOW –

October 15, 2026

Office of the Attorney General of the Republic of El Salvador
Office of the Human Rights Ombudsman
Members of the Supreme Court of Justice
Members of the Fifth Organized Crime Court

As human rights, religious, and international solidarity organizations from various countries around the world, we are deeply concerned about the criminalization and prolonged detention of dozens of people from the “La Floresta” community who were organizing legal actions to challenge the unjust eviction of over 200 peasant families who had lived there for more than a decade, as well as representatives of the Human and Community Rights Defense Unit in El Salvador (UNIDEHC), the organization that supported them in their struggle, including its spokesperson, Fidel Antonio Zavala Perez.

The Office of the Attorney General’s request for a third extension of the investigation period—granted on September 11, 2026, by the Third Judge of the Fifth Court Against Organized Crime in San Salvador—is a delaying tactic that, baselessly and without the presentation of evidence, postpones the legal proceedings until August 2027. Regarding this latest extension, the undersigned organizations **denounce**:

- **that this serious delay** 1) violates the rights to due process, a defense, legal certainty, and procedural equality, and 2) was facilitated by penal code reforms targeting organized crime that are now being applied to human rights defenders and members of communities who had organized to defend their homes;
- **the possibility that Fidel Zavala might be transferred to a prison facility** where his life would be in danger at the hands of wardens and guards whom he had previously denounced for the corruption and torture he witnessed;
- **and the complete lack of information regarding the physical and psychological health** of Fidel Zavala and the twenty-one members of the La Floresta community who are being held in pretrial detention in this case.

In the case of Mr. Zavala, one of the leading voices among former prisoners denouncing the abuses committed by the Bukele regime within Salvadoran prisons, the following factors are significant:

- In 2022, Mr. Zavala was taken into custody on charges of “fraud,” of which he was acquitted and released after 13 months in pretrial detention.
- On July 17, 2024, Mr. Zavala, through UNIDEHC, became the first person to file a formal complaint against the Director General of Prisons, as well as the directors of the La Esperanza (Mariona) and Santa Ana prisons. The complaint, submitted to the Office of the Attorney General of the Republic, details his experiences as a witness to widespread human rights abuses during the thirteen months he was incarcerated in those prisons. Mr. Zavala also had the courage to make his allegations public, appearing in interviews and on national and international news programs to testify about corruption, medical negligence, physical abuse, torture, and deaths at the hands of the state, and to report that he himself was a victim of various abuses during his detention. This work made him a recognizable face of the movement.
- In late 2024, the Attorney General of the Republic of El Salvador reopened the case in which Mr. Zavala had been acquitted of “fraud,” in an attempt to silence his prominent voice. In this first trial, in late 2025, the case was definitively dismissed, and criminal proceedings regarding that charge, have been terminated.

In her previous role as the United Nations Special Rapporteur on the Situation of Human Rights Defenders, Mary Lawlor spoke out regarding Mr. Zavala’s case,⁶ expressing concern about the serious risk that his imprisonment poses to his life and physical integrity, given that he is in the hands of prison authorities whom he accused of abuse and torture during a previous pretrial detention. In March 2025, 171 international organizations endorsed a request for precautionary measures for Mr. Zavala submitted to the IACHR.⁷ In June of that same year, the IACHR issued a

⁶ <https://x.com/MaryLawlorhrds/status/1908172575869710812>

⁷ <https://cispes.org/article/170-international-groups-call-release-salvadoran-human-rights-defender>

statement expressing its concern regarding the detention of Mr. Zavala and the arrest warrants against Ivania Cruz and Rudy Joya.⁸

In the case of the “La Floresta” community—whose members were arrested alongside Mr. Zavala in February 2025, and for which arrest warrants have been issued against two additional UNIDEHC representatives, attorneys Ivania Cruz and Rudy Joya—it is important to note that:

- The Attorney General’s Office accused them of crimes such as illicit association, trespassing, aggravated threats, and the illegal sale of land lots, among others—charges that have been denounced nationally and internationally as a misrepresentation of the community organization’s efforts to defend its right to housing and property. Mr. Zavala is also falsely accused of professional fraud—that is, of posing as a lawyer—simply because he serves as a spokesperson for UNIDEHC.
- The “La Floresta” case was referred to a specialized court for organized crime, a jurisdiction originally designed to prosecute complex criminal structures such as gangs or organized crime networks.
- **The application of charges of unlawful association and this type of court to a conflict related to community organization and the defense of rights and territory is concerning**, as this type of jurisdiction entails greater secrecy regarding case information, limitations on public access to court proceedings, and more restrictive procedural conditions for the defense.

We also join in the numerous national and international complaints regarding the political nature of the “La Floresta” community case—a fact underscored by the Spanish government’s March 2026 decision to grant political asylum to Ivania Cruz and Rudy Joya. These human rights lawyers and UNIDEHC representatives, who are also facing criminalization in connection with this case, are currently living in exile in Spain; the political nature of the case was further acknowledged by INTERPOL’s decision to withdraw the international arrest warrants previously issued for Cruz and Joya. We are also concerned that this political persecution has extended beyond El Salvador’s borders—something United Nations experts described as an “act of transnational repression.”⁹

In its report, “The Price of Dissent,” the human rights organization Cristosal reported that the case reflects a pattern of institutional actions that raise serious legal concerns regarding respect for due process guarantees and judicial impartiality, including the reopening of previously closed cases, the accumulation of new criminal charges, and proceedings such as searches and restrictions on the defense’s effective access.

In light of these facts, we join Salvadoran social movements and civil society groups in urging the Government of El Salvador to:

- Drop the criminal charges against UNIDEHC spokespersons Fidel Zavala, Ivania Cruz, Rudy Joya, and the residents of the “La Floresta” community;
- Facilitate the immediate release of Fidel Zavala and the residents of “La Floresta.”
- End the criminalization of human rights defenders and marginalized communities that organize to defend their rights.

The undersigned organizations reiterate our solidarity with Fidel Zavala, Ivania Cruz, Rudy Joya, and the leaders and residents of the “La Floresta” community who face political persecution and criminalization through this arbitrarily initiated judicial process, simply for organizing and defending their rights.

⁸ <https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2025/115.asp>

⁹ <https://www.oacnudh.org/expertos-de-la-onu-preocupados-por-la-instrumentalizacion-de-las-notificaciones-rojas-de-interpol-como-arma-contradefensores-de-derechos-humanos-de-el-salvador/>